Las banderas de la pobreza entre pandemia y cuarentena: reflexiones a partir de las políticas de gobierno de Perú y Colombia.

The flags of poverty between pandemic and quarantine: reflections on the policies of the governments of Peru and Colombia..

MISBELTS NEYDA PRADO SERNA

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

ORCID: 0000-0002-3057-107X

JHONATAN MEDINA GIRALDO

Universidad Autónoma Latinoamericana

ORCID: 0000-0002-9271-4101

Fecha de recepción: 8 de octubre de 2020

Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2020

*El virus no discrimina,
sus efectos sí.
(António Guterres)*

RESUMEN: La pandemia originada por la COVID-19 ha causado grandes estragos a nivel mundial, pero ha repercutido sobremanera en los países latinoamericanos, entre ellos Perú y Colombia, dos países vecinos con contextos sociales, políticos, económicos y culturales muy similares, en donde producto de la pandemia se ha logrado visibilizar las profundas desigualdades sociales y los graves problemas estructurales de sus sistemas. Ante ello, en el presente artículo pretendemos describir —haciendo un análisis crítico y comparado— las políticas de gobierno adoptadas tanto en Perú como en Colombia a fin de controlar la pandemia y mitigar el impacto de las medidas de confinamiento, verificando a su vez, la com-

patibilidad de estas medidas con el marco jurídico internacional de los derechos humanos y el contexto de pobreza de ambos países. Asimismo, tras detectar las causas de las deficiencias que adolecen las políticas de gobierno peruanas y colombianas, exponemos una serie de derechos humanos que se han visto afectados seriamente, para luego resaltar el rol de la solidaridad en estos dos países latinoamericanos, como una medida para paliar los efectos negativos de las cuarentenas y finalmente, proponemos una serie de sugerencias con un enfoque en derechos humanos que podrían adoptarse en Perú y Colombia como políticas de acción afirmativa y cooperación internacional, ello a fin de afrontar el contexto pospandemia y las futuras crisis.

ABSTRACT: The pandemic caused by COVID-19 has caused great devastation worldwide, but has had a great impact on Latin American countries, including Peru and Colombia, two neighboring countries with very similar social, political, economic and cultural contexts, where the pandemic has made visible the deep social inequalities and serious structural problems of their systems. In light of this, in this article we seek to describe —through a critical and comparative analysis— the government policies adopted in both Peru and Colombia to control the pandemic and mitigate the impact of the containment measures, while verifying the compatibility of these measures with the international human rights legal framework and the context of poverty in both countries. Likewise, after detecting the causes of the deficiencies suffered by the Peruvian and Colombian government policies, we expose a series of human rights that have been seriously affected, and then highlight the role of solidarity in these two Latin American countries, as a measure to alleviate the negative effects of the quarantines. Finally, we propose a series of suggestions with human rights focus that could be adopted in Peru and Colombia as policies of affirmative action and international cooperation, in order to confront the post-pandemic context and future crises.

PALABRAS CLAVE: *Pandemia; Derechos humanos; Pobreza; Políticas públicas; Cuarentena; Solidaridad.*

KEYWORDS: *Pandemic; Human rights; Poverty; Public policies; Quarantine; Solidarity.*

SUMARIO: I. Introducción. II. Consideraciones previas. 1. Dignidad humana. 2. Derechos humanos. 3. Pobreza y pobreza extrema. III. Perú y Colombia antes del contexto de pandemia. 1. Pobreza. 2. Violencia político-social. 3. Corrupción. 4. Crisis políticas. IV. Perú y Colombia durante el contexto de pandemia. 1. Medidas adoptadas por los gobiernos de Perú y Colombia en el contexto de pandemia. a. Medidas adoptadas por el gobierno de Perú. b. Medidas adoptadas por el gobierno de Colombia. 2. Compatibilidad de las medidas adoptadas con el marco jurídico internacional de los derechos humanos. V. Derechos humanos afectados directamente. 1. Derecho a la vida digna. 2. Derecho de acceso al agua potable. 3. Derecho a la alimentación. VI. La solidaridad como arma fundamental para combatir las banderas de la pobreza. VII. Reflexiones finales.

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objetivo el abordar de manera crítica y comparada, bajo un análisis con perspectiva internacional, la afectación a los derechos humanos de peruanos y colombianos en situación de pobreza y pobreza extrema, como consecuencia de las políticas de gobierno adoptadas dentro del marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, enfatizando la solidaridad como arma fundamental para paliar los efectos negativos de las políticas adoptadas en los países vecinos de Perú y Colombia.

Perú y Colombia son dos países latinoamericanos, que comparten un sinnúmero de similitudes culturales, étnicas e históricas a lo largo de su desarrollo social, político y económico. Sin embargo, estos dos países, al igual que los otros pertenecientes al contexto latinoamericano, comparten también fallas y problemáticas estructurales desde una perspectiva de desigualdad social, pobreza y pobreza extrema. Estas situaciones generan una incertidumbre con respecto a los derechos de sus habitantes, de allí que sea necesario realizar reflexiones a partir de los derechos humanos para satisfacer las necesidades básicas que produce el panorama generalizado de desigualdad. Así las cosas, derechos como la vida digna, el acceso al agua potable, seguridad alimentaria y otros que les

sean conexos se catalogan en indispensables para el quehacer diario de los individuos que viven en Perú y Colombia.

Por otra parte, es de público conocimiento que en este año 2020, ha sido declarado como pandemia el brote del virus que se denomina como COVID-19. En el marco de esta calamidad sanitaria se han expedido por parte de los gobiernos peruanos y colombianos ciertas medidas con el fin de mitigar los efectos negativos del virus; sin embargo, a raíz del contexto de desigualdad y pobreza en estos dos países, se torna indispensable realizar un análisis de compatibilidad entre dichas políticas de Estado a la luz del desarrollo normativo en materia de derechos humanos con perspectiva nacional, regional —Latinoamérica—, internacional y comparada entre Perú y Colombia, con el objeto de visibilizar la eficiencia o no de dichas medidas.

Entre las medidas adoptadas en el marco de la pandemia generada por la COVID-19 podemos encontrar una que fue implementada en los dos países a los que hemos hecho mención: la cuarentena. Con esta directriz se limita la libertad de locomoción y tránsito en el territorio, asunto que es posible gracias a la declaratoria del estado de emergencia en los dos países y así evitar aglomeraciones para que no haya contagios generalizados de la población. Limitar el derecho a la libertad de tránsito y locomoción significa que otros derechos que dependen de este se vean afectados, pues encontramos que gran parte de la población en Perú y Colombia necesitan salir de sus hogares para poder trabajar, obtener dinero para alimentarse y así vivir en condiciones de dignidad, en tanto que el alto índice de desempleo e informalidad, como variable similar en estos países, produce que el quedarse en casa en un confinamiento estricto sea perjudicial cuando se vive sin empleo, o que teniéndolo, este sea informal.

El anterior contexto reseñado produjo dinámicas sociales en Perú y Colombia de modo similar, pues se exhibió por parte de aquellas personas que se encontraban sin dinero para sufragar su vida en cuarentena una bandera blanca para el país de Perú,

y una roja para el país de Colombia, esto con el objetivo de simbolizar el hambre que tenían estas familias en un panorama de pobreza y pobreza extrema, exigiendo así a los gobernantes, medidas que garanticen un mínimo de dignidad para vivir en confinamiento. A estas dificultades se les suman los escándalos de corrupción, las políticas públicas mal elaboradas y el contexto de crisis sociopolítica que tenían estos dos Estados previo a la declaratoria de pandemia, que sin duda alguna merecen un análisis a la luz de los derechos de los ciudadanos de cada país y con ello generar reflexiones para próximas crisis de salud y/o humanitarias.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

Previo a iniciar con el análisis del tema neurálgico del presente artículo, consideramos necesario, en primer lugar, abordar de manera breve algunos términos básicos a utilizar en el texto. Así, iniciaremos realizando algunas consideraciones con respecto a palabras como dignidad humana, derechos humanos, pobreza y pobreza extrema, pues son componentes transversales para abordar de manera crítica y comparada, bajo un análisis con perspectiva internacional, la situación de Perú y Colombia a la luz de las políticas de gobierno adoptadas dentro del marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

1. Dignidad humana

Si bien, la idea de dignidad humana es una de las reflexiones que mayores debates teóricos y filosóficos ha traído, no nos corresponde en este espacio debatir sobre ello, sino más bien, especificar el concepto de dignidad humana que manejamos. En ese sentido, podemos afirmar que la dignidad es un principio que rige las actuaciones estatales y constituye el fundamento de los derechos humanos y de todos los otros valores propios de la condición humana, cuyo respeto significa reconocer ciertos derechos fundamentales (Peces-Barba 2007: 123). Pues “[...] implica que cada uno de no-

sotros tenemos algo intrínsecamente valioso que no puede entrar en el campo de lo negociable, de lo disponible ni de lo prescindible, sea por parte del poder político, de terceras personas o del propio interesado (Bustamante 2018: 200)”.

Cabe señalar además, que este principio de dignidad humana goza de protección constitucional tanto en Perú como en Colombia; así, la Constitución Política del Perú refiere en su artículo 1° que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; mientras que la Constitución Política de Colombia prescribe en su artículo 1° que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, [...] democrática, [...] fundada en el respeto de la dignidad humana [...]”. Sin duda, estos dos artículos constitucionales, configuran el pilar vertebral de todo el Estado de derecho en Perú y Colombia, y que, a su vez, fundamentan y orientan todas las actuaciones del aparato estatal, político, económico y social, siempre en relación con el respeto de los derechos humanos.

2. *Derechos humanos*

En cuanto a la expresión *derechos humanos* entendemos que hace referencia, en un sentido amplio, a aquel “[...] conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano” (Oficina en México del Alto Comisionado 2011: 6). Mientras que, en un sentido más estricto, “los derechos humanos son esos mismos derechos, pero en la medida que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional (Casal 2008: 16)”.

Teniendo en cuenta ello, debemos entender que los derechos humanos sirven para identificar y adoptar una serie de instrumentos estatales que tienen como principal misión proteger y promover la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, entendidos como seres valiosos en sí mismos, que están dotados, en diferente

medida, de habilidades, competencias y capacidades —que identificamos con el término dignidad humana— que les hacen singulares y cuyo desarrollo y ejercicio se considera esencial (Peces-Barba 2007: 155). Esta idea —a la fecha— alcanza una mayor vigencia en el contexto de pandemia que vamos atravesando. Puesto que, los derechos humanos y la dignidad humana presuponen mecanismos que coadyuvan con la identificación de las políticas públicas más correctas y adecuadas, que deben implementar los Estados para salvaguardar los derechos, libertades e intereses de sus habitantes.

En este sentido, es necesario señalar que toda medida adoptada por los Estados para hacerle frente a la pandemia o a algún contexto similar, debe tener un enfoque basado en el respeto de la dignidad y los derechos humanos de sus habitantes, sobre todo de aquellos grupos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Lo que conlleva además, que las actuaciones de los Estados vayan en consonancia con sus obligaciones internacionales adquiridas tras ratificar los tratados en materia de derechos humanos.

3. Pobreza y pobreza extrema

La pobreza es un término anclado a la carencia de algunos bienes básicos para la subsistencia del individuo que, entre otros, podemos mencionar el acceso a servicios de salud, alimentación, tener una vivienda para resguardarse y la posibilidad de educarse, todo ello en torno a unas condiciones que doten de dignidad a la vida humana. Al respecto, se ha referido la Organización de las Naciones Unidas —en adelante, ONU—, indicando —en términos cuantitativos— que se encuentra en pobreza extrema aquella persona que vive con 1 dólar al día aproximadamente (ONU 2010a).

La preocupación respecto de la pobreza en el mundo ha sido creciente en los últimos años, por ello, desde el año 2000 se unió la comunidad internacional para conversar —entre otras cosas— sobre la pobreza; de allí surgen los denominados objetivos del milenio que fueron planteados en el marco de la Agenda 2030, estableciéndose 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero

de los objetivos se creó en torno a erradicar la pobreza y fue susceptible de ser evaluado en el año 2015, allí se planteó que a nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se había reducido en más de la mitad (ONU 2015), hecho que mostró un gran avance para el mundo.

En el sentido de proponer soluciones jurídicas a este problema, se expidieron múltiples tratados internacionales, en particular llama la atención que en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —en adelante, PIDCP— y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —en adelante, PIDESC— hayan sido similarmente consecuentes con este compromiso, pues desde su aprobación por la ONU en 1966 se produjo un acuerdo común para enmarcar la pobreza, como sinónimo de miseria, y su erradicación como un objetivo en esencia, así: “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

En este mismo sentido —en el contexto regional de América— tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en adelante, Convención ADH—, esta dispone también, un compromiso contra la incertidumbre que deja la pobreza en el desarrollo social de los seres humanos, pues este pacto convencional contiene diversas disposiciones que comienzan a encaminar el estado de pobreza hacia un enfoque de derechos humanos y desde allí crear un panorama de protección jurídica; así, en el artículo 5 de la Convención ADH, se regula el derecho a la integridad de la persona para que la condición del ser en torno a su integridad física, psíquica y moral esté intacto. Del mismo modo, en el artículo 24 de la Convención ADH, se reconoce el derecho a la igualdad ante la ley con el objeto de cerrar las brechas de desigualdad que genera la pobreza.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que la pobreza de los países latinoamericanos, en relación al contexto regional y al mundo, debe ser vista aún con preocupación, pues son territorios que están en vía de desarrollo, y algunos incluso, siguen siendo subdesarrollados. Bajo esta óptica, la Comisión Económica para América y el Caribe —en adelante, CEPAL— resalta que, América Latina se ha caracterizado históricamente por altos niveles de desigualdad y varios de sus países presentan disparidades en la distribución del ingreso que se encuentran entre las más altas del mundo (ONU 2019)”, de allí que la pobreza —como un problema estructural marcado en Latinoamérica— sea un asunto que alimenta diversos problemas alternos, entre ellos la desigualdad.

Así, la pobreza es una figura que, desde Latinoamérica, ostenta una estrecha relación con la dignidad, los derechos humanos y su garantía; en estos términos, se torna necesario conceptualizar jurídicamente las nociones de *pobreza* y *pobreza extrema*, pues de cada término se desprende un ambiente distinto de posibles vulneraciones a derechos. Sin embargo, no ha sido tan fácil su diferenciación, en tanto que se han analizado terminologías distintas para caracterizarle, sin llegar a un consenso concreto para definirlos; por ejemplo, se ha estimado importante para la concreción del concepto, lo sostenido por Spicker y otros autores, quienes afirman que hablar sobre lo que se entiende por *costo de vida*, *indigencia*, *necesidades básicas insatisfechas*, *calidad de vida*, entre otros, dado que las interpretaciones podrían variar en los diferentes Estados; así como también existen diferencias culturales sobre lo que se entiende como *bienestar* y sobre lo que significa *desarrollo* (Spicker *et al.* 2009: 291-306)”.

En el marco de lo anteriormente reseñado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, Comisión IDH— ha tomado la posición de evaluar el contexto de pobreza en el continente americano, y desde allí generar una reflexión en torno al concepto de pobreza a partir de un análisis de varios factores. Ahora bien, en términos concretos la Comisión IDH ha indicado

—citando al experto independiente de la ONU para derechos humanos y la extrema pobreza, Arjun Sengupta— que:

“Si bien, habitualmente se ha venido considerando que la pobreza es la falta de ingresos o de poder adquisitivo para atender las necesidades básicas, la escasez de ingresos puede considerarse en términos absolutos o relativos, según se entienda la noción de necesidades básicas. La distinción entre pobreza y extrema pobreza en el marco de la escasez de ingresos, sería esencialmente una cuestión de grado o de amplitud del fenómeno. Mientras la pobreza se define en función del acceso a bienes y servicios y de su disponibilidad, la extrema pobreza supone que se dispone de un conjunto mucho más reducido de bienes y servicios y/o que la situación de pobreza ha existido durante un período más prolongado (Comisión IDH 2017: 23)”.

En ese sentido, se ha dispuesto que hablar de pobreza se limita a crear líneas de medición, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —en adelante, FAO— el criterio de línea de pobreza más utilizado “es definir un valor monetario para una canasta básica de alimentos —en adelante, CBA— referencial que satisface las necesidades mínimas de kilocalorías necesarias para desarrollar una vida sana y activa (ONU-FAO 2012: 46)”. Posterior a la línea de pobreza se puede hablar de la necesidad de otros bienes básicos necesarios para el ser humano, y así finalmente retornar al concepto de pobreza multidimensional. Sin embargo, el ser humano dependiendo de sus necesidades, requiere no solo de la obtención de recursos monetarios, sino también del acceso a unos recursos y servicios para su desarrollo social, ello significa tener una visión multidimensional de sus necesidades, que al estar insatisfechas, deberán evaluarse desde el concepto de pobreza multidimensional que, consecuentemente posee una estrecha relación con los derechos humanos para satisfacer otra serie de condiciones sociales, personales y de acceso a servicios que deben ofrecerse al individuo para un mejor vivir individual y colectivo.

III. PERÚ Y COLOMBIA ANTES DEL CONTEXTO DE PANDEMIA

Es de público conocimiento que, la crisis sanitaria causada por la COVID-19, viene ocasionando grandes estragos a nivel mundial. Esta enfermedad infecciosa —descubierta en Wuhan China, en el 2019— es causada por una cepa de virus que pertenece a la familia de los *Coronaviridae*. Inicialmente, el 30 de enero de 2020, la COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud —en adelante, OMS— como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, pero debido a su gravedad y rápida propagación, el 11 de marzo de 2020, fue declarada como pandemia al haberse registrado para esa fecha 118 000 casos de COVID-19 en 114 países (OPS 2020: 1). Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la pandemia a exacerbado las grandes desigualdades y, consecuentemente, ha visibilizado los problemas estructurales que adolecen los distintos países del mundo, entre ellos los Estados de Perú y Colombia, países vecinos que, antes de la llegada de la pandemia iban atravesando distintas crisis originadas por la pobreza, la violencia político-social, la corrupción y las crisis políticas; las mismas que pasamos a desarrollar.

1. Pobreza

En el Perú, la pandemia nos encuentra en medio de otra crisis causada, entre otros, por la pobreza y pobreza extrema. Así, para el año 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática —en adelante, INEI— —órgano rector del Sistema Estadístico Nacional peruano— la tasa de pobreza del país se ubicó en un 20,2%, lo que involucra a un aproximado de 6 millones 564 mil 93 personas que tienen un gasto per cápita mensual que no cubre el costo de la canasta básica compuesta por alimentos y por bienes y servicios valorizada en 352 soles mensuales. Por su parte, la pobreza extrema se situó en un 2,9% que equivale a 942 mil 370 personas aproximadamente. Cabe señalar que, en el Perú se considera pobre extremo a la población cuyo gasto per cápita mensual no cubre el costo de la canasta básica de alimentos, que es de 187 soles (INEI 2020: 16).

En tanto en Colombia, para el año 2019, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —en adelante, DANE— entidad encargada de planeación, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia— referenció que el país ostentaba una pobreza del 17,5% (DANE 2020), cifras que son preocupantes, pues este porcentaje se estructura a partir del concepto de pobreza multidimensional; es decir, de la carencia de ciertos bienes y servicios para subsistir, como: i) la educación, ii) las condiciones de niñez y juventud, iii) trabajo, iv) salud, v) vivienda y servicios públicos (DANE 2020), lo anterior quiere decir que el 17,5 % de la población carece de estos recursos enunciados y en consecuencia se encuentra en situación de pobreza total, extrema y deplorable.

2. Violencia político-social.

La violencia político-social, es uno de los problemas que tienen en común Perú y Colombia; y que hasta la fecha han ido afectando considerablemente el orden constitucional de estos dos Estados latinoamericanos. Así, en el caso peruano, el conflicto armado interno entre los grupos terroristas Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso -PCP-SL-, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru —MRTA— y las fuerzas del Estado; tuvo su punto más álgido durante las décadas de los 80 y 90, trayendo como saldo la violación sistemática de los derechos humanos de un número considerable de peruanos; pero lo más alarmante de ello, es que la población afectada con el conflicto armado, ha sido y viene siendo largamente excluida, encontrándose muchos de ellos en situación de pobreza y pobreza extrema, sin haber siquiera recibido las reparaciones dignas que les corresponden y lo que es peor, permaneciendo en el olvido.

Por otro lado, la historia colombiana nos muestra un conflicto vigente desde el año 1920 que se intensifica en los años cuarenta a cincuentas, y se perpetúa como conflicto armado propiamente dicho en el año 1964 con el surgimiento de grupos alzados en armas denominados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia —FARC—, Ejército de Liberación Nacional —ELN—, Ejército Popular de Liberación —EPL— y posteriormente el nacimiento del paramilitarismo en los años 80's. Este es el punto de partida del conflicto en Colombia, a partir de allí se comienzan a generar hechos desastrosos para la nación que hasta el 1 de enero del 2020 se traducían en 8.944.137 de víctimas registradas (Unidad de Víctimas 2020).

En el año 2016 se pactó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo -FARC-EP-, como consecuencia de este acuerdo se pretendía acabar con gran parte del conflicto histórico en el país; sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja —en adelante, CICR— se pronunció con preocupación con la situación que afrontaba el país en ese momento y que posteriormente afrontaría, manifestó que si bien aplaudía la realización de este pacto, el contexto en Colombia seguía siendo hostil, ya que seguían existiendo por lo menos otros cinco conflictos armados de carácter no internacional, entre el gobierno del país y el ELN, EPL, AGC —Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y grupos de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (CICR 2018).

Así, la pandemia ha tocado los suelos peruanos y colombianos, cuándo aún estos países no lograban recuperarse a plenitud, de las crisis causadas por la violencia político-social.

3. *Corrupción.*

El panorama de crisis en Perú y Colombia no solo ha sido ocasionado por la pobreza y la violencia político-social; sino también por la corrupción. El Perú, por ejemplo, viene atravesando una grave crisis política, económica y social, a raíz del destape de corrupción, especialmente cuando en el 2016 salieron a la luz las declaraciones del CEO de la empresa Odebrecht, que fue beneficiada con contratos estatales a cambio de grandes pagos millonarios a los distintos funcionarios del gobierno peruano, entre ellos los últimos cinco presidentes del Perú, ministros, congresistas, gobernadores

regionales y alcaldes —caso Lava Jato—. Asimismo, se descubrió los grandes niveles de corrupción a nivel del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General y el Consejo Nacional de la Magistratura, esto tras haberse hecho público una serie de audios que comprometían, —entre otros— a jueces y fiscales, superiores y supremos —caso Cuellos Blancos del Puerto—.

Así, según el último Índice de Percepción de la Corrupción practicado en el 2019 por Transparencia Internacional, el Perú se encuentra en el puesto 101 con 36 puntos, lo que nos ubica cerca al tercio inferior compuesto por los países más corruptos (Transparencia Internacional 2020). Todo ello, sin duda, afecta al pueblo peruano, acrecentando los niveles de pobreza y las deficiencias del aparato estatal en los sectores de salud, educación y otros. Lo que se agrava aún más con la miopía de las políticas públicas adoptadas por el gobierno peruano, que son incapaces de coadyuvar con la solución de los problemas sociales del país.

Por otra parte, en Colombia el contexto es similar al peruano. Así, de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción practicado por Transparencia Internacional, durante el año 2019, Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100, ocupando el puesto 96 entre 180 países (Transparencia Internacional 2020). Esta cifra dice, en términos cuantitativos, que Colombia tiene un indicativo de corrupción elevado, pues 100 significa sin corrupción y 0 corrupción elevada. Esta crisis de corrupción genera consecuentemente una crisis política, en tanto que corromper el sistema es atentar contra los recursos de la administración pública, que por esencia son utilizados para que el aparato estatal funcione al servicio del ser humano. Así, afectar el Estado significa poner en riesgo las instituciones que mueven el desarrollo económico y social de un país, hecho que se agrava cuando emerge un problema de salud mundial como el que estamos pasando.

4. Crisis políticas.

En el Perú, tras el destape de corrupción, se iniciaron las graves crisis políticas en la gestión pública, haciéndose más visibles los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, y luego de dos intentos de vacancia presidencial, en marzo de 2018, se alcanza el punto más álgido de la crisis política, cuando el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, después de un año y 7 meses en el gobierno, se vio obligado a renunciar por escándalos de corrupción, por haber indultado al expresidente Alberto Fujimori —que cumplía su condena por graves violaciones a los derechos humanos y por casos de corrupción— y por haber ofrecido obras a los congresistas, a cambio de no ser vacado.

A raíz de ello, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, asumió la Presidencia de la República, y debido a las constantes obstrucciones de la mayoría congresal, con respecto a su gobierno y las investigaciones por los casos de corrupción, decidió disolver el Congreso en el 2019 y convocó a elecciones parlamentarias en enero del 2020.

Mientras que, en Colombia, la crisis política ha devenido como consecuencia directa de los conflictos armados internos, pues muchos de los grupos armados surgieron a la vida con el objeto de hacer oposición a quien se encontraba o encuentra en el poder. Asimismo, esta crisis ha acaecido también por la institucionalización de la corrupción en los órganos estatales colombianos, lo que ha ido ocasionando inestabilidad política.

Es en este contexto, que encuentra la pandemia causada por el COVID-19, a Perú y Colombia, países vecinos en constantes crisis, en donde se evidencian entornos de desigualdad, pobreza y pobreza extrema ocasionados por la violencia político-social, la corrupción y las crisis políticas, lo que a su vez se ha agravado con la llegada de la pandemia.

IV. PERÚ Y COLOMBIA DURANTE EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Con fecha del 06 de marzo de 2020, se registraron los primeros casos de coronavirus tanto en Perú como Colombia; siendo que, a partir de esa fecha, los casos de contagio por COVID-19 se fueron incrementando de manera preocupante. Lo que ha originado que se adopten drásticas medidas que afectan los derechos humanos de los ciudadanos peruanos y colombianos. A su vez, tanto la pandemia como las medidas adoptadas para combatirla han originado diversas dinámicas sociales, pero la más resaltante ha sido aquella en la que los peruanos y colombianos, en situación de pobreza y pobreza extrema, izaron banderas en las fachadas de sus viviendas, como medio de protesta y auxilio, para denotar que no todos se encuentran en las mismas condiciones para afrontar la pandemia y las cuarentenas.

1. Medidas adoptadas por los gobiernos de Perú y Colombia en el contexto de pandemia.

Como lo mencionábamos precedentemente, ante la llegada de la COVID-19, los diversos países del mundo tuvieron que adecuar sus políticas públicas y adoptar medidas que contribuyan —de acuerdo a sus recursos y contexto— a proteger la salud pública, controlar la pandemia y mitigar su impacto, mediante la ralentización de la transmisión y el descenso de la tasa de mortalidad asociada a la COVID-19; en este marco, diversos Estados han declarado *estados de emergencia, estados de excepción, emergencia sanitaria, estados de alarma, estados de catástrofe por calamidad pública* y otros, seguidas de otras medidas, como la de confinamiento, que ha sido comúnmente adoptada por los Estados y que ha obligado a millones de personas a aislarse en sus hogares, reduciéndose las actividades laborales, económicas, comerciales, culturales, artísticas, deportivas y otras, a su contenido más mínimo; generando un gran impacto en la economía mundial. Realidades que no han sido ajenas ni a Perú ni a Colombia.

a. Medidas adoptadas por el gobierno de Perú.

El Estado peruano —tras registrar su primer caso de COVID-19 y declararse la pandemia— mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19 —figura constitucional prevista en el artículo 137° numeral 1 de la Constitución Política del Perú— confirmándose para esa fecha un total de 71 casos positivos de COVID-19. Seguido de ello, se han ido implementando una serie de medidas en el sector salud, económico, social, educativo, político y de justicia. A continuación, haremos un recuento de las medidas más resaltantes, adoptadas por el Estado peruano.

Entre las medidas más resaltantes, tenemos aquella que dispuso el aislamiento social obligatorio, que fue dada junto a la declaración del estado de emergencia nacional, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por un periodo de 15 días, señalando que, mientras estén vigentes las restricciones a la libertad de tránsito de las personas, se buscaría garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. Días después, mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se estableció la inmovilización social obligatoria —comúnmente conocido como toques de queda— de todas las personas en sus domicilios, de lunes a sábado en horas de la noche y madrugada, y los domingos, durante todo el día. Pero debido al incremento de casos, estas medidas se fueron prorrogando a nivel nacional, hasta en 5 oportunidades.

Por otra parte, para mitigar el impacto de estas medidas que restringen la libertad de tránsito, el gobierno otorgó cinco subsidios económicos: el bono yo me quedo en casa, el bono rural, el bono independiente, el bono familiar universal y el bono de electricidad;

dirigido a los hogares en situación de pobreza o pobreza extrema y/o cuyos integrantes hayan sido afectados por la suspensión perfecta de labores o cuenten con un trabajo informal. Tratando de beneficiar con ello a aproximadamente 8'600,000 hogares. Asimismo, el gobierno nacional realizó la transferencia de 200 millones de soles para los 1874 municipios provinciales y distritales que existen en el país, esto a fin de que cada municipio pueda adquirir y distribuir a la población vulnerable bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar.

Otra de las medidas adoptadas por el Estado peruano fue la de autorizar a los trabajadores dependientes el retiro de hasta S/ 2,400 soles de la Compensación por Tiempo de Servicios —CTS—, esto a través del Decreto de Urgencia N° 033-2020. De igual manera, mediante el Decreto de Urgencia N° 034-2020, se permitió el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema Privado de Pensiones, por hasta S/ 2 000,00 soles de su Cuenta Individual de Capitalización —CIC—, y en aquellos casos en que contaran con un monto menor a los S/ 2 000,00 soles, se autorizó el retiro del íntegro de dicha cuenta.

Mientras que en el sector educación, las medidas que se aplicaron fueron las de suspender las clases presenciales en los centros educativos del país, iniciándose las clases a través de la modalidad virtual. Asimismo, se autorizó la adquisición de más de 840 mil *tablets* para los estudiantes de zonas rurales y urbanas más vulnerables, con el fin de garantizar su derecho a la educación.

Con 285.213 contagios y 9.677 fallecidos por COVID-19, el 30 de junio de 2020, el Gobierno peruano decidió poner fin a las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, después de que la población se mantuviera 107 días en cuarentena nacional; con excepción de 7 provincias, en donde se iniciaron las cuarentenas focalizadas.

En cuanto a las medidas de reactivación económica, dadas por el Gobierno, estas se iniciaron cuando aún se encontraba vigente

la cuarentena nacional; así, el Estado peruano, después de haber transcurrido varios días con el sector productivo paralizado, mediante los Decretos Supremos N° 080-2020-PCM, N° 101-2020-PCM y N° 117-2020-PCM, dispuso la reanudación de las actividades económicas de manera gradual y progresiva dentro del marco del estado de emergencia, con el fin de amortiguar las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Para esta reanudación de actividades, se fijaron cuatro fases, iniciándose la primera en mayo del 2020.

Sin embargo, pese a que el gobierno peruano ha desplegado múltiples esfuerzos para acudir a las familias peruanas más vulnerables, a través de canastas con alimentos de primera necesidad, bonos económicos y otros que detallamos anteriormente, estas medidas no han logrado cumplir con su finalidad última, debido a diversos factores que los han vuelto ineficaces, como:

- 1) El desconocimiento del gobierno peruano sobre su población y el contexto de pobreza en el que se encuentra realmente, pues si bien en el 2017, se realizó el último censo nacional de la población peruana, este no se llevó adecuadamente —pues no hubo suficiente material para censar a las familias peruanas, no existieron suficientes recursos humanos y no se llegaron a censar a millones de familias que habitan en las zonas urbanas y rurales, siendo invisibles para el Estado una vez más, las víctimas del conflicto armado interno y los integrantes de las comunidades campesinas e indígenas, que en su mayoría se encuentran en un contexto de pobreza y pobreza extrema— lo que originó que los resultados difundidos por el INEI con un margen de error del 5,94% — la tasa más alta de los últimos censos en el Perú— disten de reflejar la verdadera dimensión de la población peruana y el contexto real en el que viven. Y ahora, en plena pandemia se han hecho más visibles todos estos errores, lo que ha contribuido a que muchos peruanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad no hayan recibido ningún apoyo económico por parte del Estado.

- 2) Desactualización del Sistema de Focalización de Hogares —en adelante, SISFOH—. El SISFOH es la base de datos que el Estado peruano obtiene de las Unidades Locales de Empadronamiento para focalizar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, y es un requisito exigido para acceder a las ayudas económicas del Estado y el Seguro Integral de Salud. Pero ahora con el contexto de pandemia se ha puesto en evidencia su desactualización y la corrupción que se genera en las Unidades Locales de Empadronamiento de los gobiernos locales, ya que cuando se realizó el levantamiento de información de los hogares y la atención de las solicitudes de clasificación socioeconómica, se pudo advertir que gran parte era proveniente de los trabajadores de las propias municipalidades y de los propios empadronadores o sus familiares (Defensoría del Pueblo 2020a).

- 3) La corrupción en la entrega de canastas familiares con productos de primera necesidad y bonos económicos. Apodícticamente —en este contexto de pandemia— ha cobrado vigencia la frase de Augusto Roa Bastos, cuando señalaba que “el poder de infección de la corrupción es más letal que las pestes”. En el Perú, lejos de que estos actos repudiables de corrupción desaparezcan en el contexto de pandemia, se han ido incrementado; así, para junio de 2020, la Contraloría General pudo identificar a 4212 funcionarios y servidores públicos que habrían sido favorecidos con la entrega de canastas de víveres durante el estado de emergencia sanitaria por COVID-19, pese a que no les correspondía recibir esa ayuda social, dado que cuentan con ingresos netos que van desde los S/. 1200 hasta más de S/10 000 soles mensuales (La Contraloría General de la República del Perú 2020a: 2-3). Asimismo, la Contraloría pudo identificar múltiples deficiencias en la distribución de canastas, como la falta de padrones beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, deficiencias en el almacenamiento, demora y sobrevaloración en la compra de víveres y productos (La Contraloría General de la República del Perú 2020b: 2-3). Todo ello ha generado que el Ministerio Público, a través de sus Fiscalías Especializa-

das en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realicen sendas investigaciones por actos de corrupción.

- 4) La entrega inoportuna o tardía de las ayudas sociales. Los esfuerzos del Estado para acudir, en alguna medida, a las poblaciones vulnerables, han devenido en ineficaces, debido a la ejecución tardía de las medidas adoptadas y las trabas burocráticas, aún en pleno estado de emergencia. Así, estas ayudas que pretendían aliviar económicamente las necesidades de las familias peruanas —que accedieron a los bonos económicos y canastas familiares— durante el primer mes de cuarentena, han llegado a ellas después de dos o cinco meses —entre marzo y agosto— y en algunos casos a la fecha de la redacción del presente artículo, no han llegado a concretarse. Al respecto, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que, en el caso de los bonos económicos, éstos no han sido oportunos para las familias que siendo beneficiarias tuvieron dificultades para cobrarlo o que, incluso, aún no pueden cobrarlo debido a: i) información desactualizada en el padrón, ii) formas de pago no adecuadas para algunas realidades, iii) falta de capacidad de respuesta de los canales de orientación, consultas y reclamos implementados por las entidades responsables y iv) falta de criterios para la atención de casos de personas privadas de su libertad, personas adultas mayores en centros de atención y personas en grave estado de salud (Defensoría del Pueblo 2020b).

b. Medidas adoptadas por el gobierno de Colombia.

En torno a la pandemia y las medidas adoptadas, en el caso colombiano emerge desde la emisión del Decreto 417 del 17 marzo de 2020, allí se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional y se permite a la rama ejecutiva, encabezado por la presidencia de la República, realizar decretos con fuerza de ley, y en consecuencia suspender ciertos derechos. En el marco de lo anterior se fueron dando una serie de medidas con el objeto de proteger la salud de las personas. La primera de las medidas fue la expedición del Decreto 420 del

18 de marzo de 2020, que prohibió las aglomeraciones de más de 50 personas; sin embargo, no fue sino hasta el 22 del mismo mes que se impone la cuarentena total en todo el territorio nacional por intermedio del Decreto 457 de 2020, esto implicó limitar el derecho a la libre locomoción para que todas las personas se quedaran confinadas en casa.

De la cuarentena se preveían muchas consecuencias colaterales en temas de sostenibilidad y seguridad alimentaria de las personas, por esta razón el gobierno nacional emprendió varias acciones con el fin de mitigar el impacto negativo. Dentro de las acciones que inició el Estado se pueden destacar los bonos económicos, entre ellos: el programa familias en acción que benefició a 2.600.000 familias que, aparte del subsidio mensual que se les daba, recibirían un incentivo adicional; el programa jóvenes en acción benefició a 296.000 personas que, aparte del subsidio mensual que se les daba, recibirían un incentivo adicional; el programa subsidio adulto mayor fue destinado aproximadamente a 1.700.000 adultos mayores donde, aparte del subsidio mensual que se les daba, recibirían un incentivo adicional; devolución del IVA, un bono económico para beneficiar aproximadamente 1.000.000 de hogares y por último el Ingreso Solidario, bono monetario que buscó beneficiar aproximadamente a 3.000.000 de familias.

Desde otro ángulo, el gobierno decidió postular tres días distintos sin el cobro de un impuesto denominado IVA, estos días fueron el 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, el primer día se generaron aglomeraciones, y, en consecuencia, contagios. Por ello muchos mandatarios de ciudades de Colombia declararon que en posteriores días solo podría comprarse por plataformas de comercio electrónico, y así evitar aglomeraciones y contagios.

Entre otras cosas, el Decreto 470 de 2020 ordena una entrega de alimentos que se daban en las escuelas a los estudiantes, ello por medio del programa de alimentación escolar, con el objeto de que los alimentos que se daban dentro de la escuela a los jóvenes fueran llevados hasta sus casas, lugar donde además de estar con-

finados también se encontraban estudiando. Por otra parte, desde abril, a través del Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, se permitió hacer un retiro parcial de las cesantías a las personas que han tenido una reducción en sus ingresos, las cesantías son un ahorro que se realiza dentro de las administradoras de fondos de pensión, ahorro que ha de servir también para mitigar el impacto negativo que tiene la pandemia en las vidas de los colombianos.

El confinamiento en Colombia poco a poco ha ido finalizando, y con ello se ha dado la llamada apertura y reactivación económica. Así, el Decreto 593 de 2020 da apertura a tres sectores económicos desde el 11 al 25 de mayo: manufactura, construcción, industrial. Desde allí se ha dado apertura gradual a los sectores económicos, sin que aún se hubiera terminado la cuarentena. Posteriormente se dio finalización a la cuarentena el 31 de agosto del 2020 y con ello a otros sectores económicos; sin embargo, aún sigue un aislamiento selectivo, pues si bien el confinamiento ha ido terminando, el Estado tiene la obligación de tomar acciones preventivas con el objeto de cuidar la salud de todos.

Ahora bien, dentro de las ayudas y medidas dadas por parte del gobierno se pudieron entrever varias irregularidades que incluso, dan cuenta que, en tiempo de pandemia y crisis, sale a flote la corrupción y la toma de decisiones que van en contravía de los derechos de la población y la esencia misma de servir a la comunidad como fin del Estado, entre otros, encontramos los siguientes factores:

- 1) Lo primero, es advertir que existió un descontento social generalizado por el programa de bonos económicos denominado “ingreso solidario”, toda vez que muchas de las ayudas económicas que reposaban en el sistema, eran para personas que ya estaban muertas o, que por el contrario, ni existían. No obstante, la problemática de la corrupción no paró allí, por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en un comunicado de prensa dado el 21 de mayo de 2020, dieron a conocer decisiones que vislumbran la corrupción de una gran cantidad de mandatarios departa-

mentales y municipales en el marco de la llamada *Transparencia para la emergencia*. Así las cosas, la fiscalía imputará cargos y además emitirá orden de captura a más de 40 servidores públicos, entre los cuales, hay varios alcaldes y gobernadores de Colombia, puesto que se descubrió mal manejo de los recursos destinados a mitigar la crisis (FORBES 2020).

- 2) La desviación de los recursos destinados a mitigar el impacto de la pandemia, los sobrecostos en los contratos que según la Contraloría de Colombia han superado hasta el 21%. Esta entidad de control ha revisado contratos por el valor de \$4 billones de pesos, y ha encontrado que algunas entidades públicas han adjudicado contratos a contratistas que financiaron sus campañas y que, además, en ciertos casos, se han gastado hasta el 20% del presupuesto de la entidad (DINERO 2020).
- 3) La toma de decisiones ineficaces que, si bien pretendían mitigar el impacto que tuvo el virus del COVID-19 sobre el mercado, no cumplieron su función. Ejemplo de ello es la exención del impuesto IVA en tres días del año, lo que pretendía era eximir sobre los bienes y servicios del mercado el cobro de este impuesto; sin embargo, tal y como fue descrito anteriormente, el día sin IVA promovió las aglomeraciones de personas en todas las ciudades del país y tuvo un impacto negativo en la salud de las personas, que se tradujo en una alta tasa de contagio para esos días.

2. *Compatibilidad de las medidas adoptadas con el marco jurídico internacional de los derechos humanos.*

Como mencionamos en el primer acápite, toda medida adoptada por los Estados para enfrentar la pandemia y sus efectos debe tener un enfoque basado en el respeto de la dignidad y los derechos humanos de sus habitantes. En ese sentido, podemos afirmar que las actuaciones hechas por los Estados de Perú y Colombia —la declaración del estado de emergencia y las medidas de confinamiento— en el contexto de pandemia cumplen en alguna medida,

con los parámetros establecidos por los Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos humanos.

Así tenemos que, las medidas restrictivas de derechos adoptadas por ambos países, encuentran base legal no solo en su ordenamiento jurídico interno, sino también en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, como en el PIDCP— que rige en el Perú desde el año 1978 y en Colombia desde 1976— en cuyo artículo 4º, numeral 1, menciona lo siguiente:

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4, numeral 1)”

En este mismo artículo se señala también, los derechos que no pueden ser suspendidos a raíz de estas medidas y, cuál debe ser el conducto por seguir por los Estados Parte que adopten medidas restrictivas de derechos, así conforme lo establece el PIDCP, todo Estado:

“Todo Estado parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 4, numeral 3).”

Por otra parte, tenemos también a la CADH —ratificada por el Perú en 1978 y por Colombia en 1973— en cuyo artículo 27, con una marcada influencia normativa ejercida por el PIDCP, prescribe que:

“1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social” (Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 27).

Asimismo, este artículo de la CADH detalla un catálogo de derechos humanos que no pueden ser suspendidos, a pesar de adoptar una disposición de suspensión de derechos, estos son los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, a la libertad de conciencia y de religión, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos del niño; los derechos políticos, el principio de legalidad y de retroactividad, y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Además, al igual que el PIDCP, la CADH señala el conducto que deben seguir los Estados Parte tras adoptar una disposición de suspensión de derechos, pero a diferencia de lo señalado en el PIDCP, el derecho de suspensión debe ser informado por conducto del Secretario de la Organización de los Estados Americanos.

De ahí podemos afirmar que —dentro del marco normativo internacional de los derechos humanos— son válidas y legítimas las actuaciones de los Estados de Perú y Colombia en el contexto de pandemia, mediante las cuales se declararon el estado de emergencia y adoptaron las medidas de aislamiento social, invocando la Salud Pública Nacional para justificar la suspensión de derechos;

además, de que va en consonancia con las recomendaciones dadas por la OMS. Pues, en este contexto, resulta incluso “imperativa [...] la restricción del pleno goce de derechos como el de la reunión y la libertad de circulación en espacios tangibles, públicos o comunes, que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para la propia atención médica y con el objeto de generar adecuada distancia social” (Comisión IDH 2020).

Debemos resaltar también, que en ambos países, al tomar estas medidas que suspenden los derechos, se ha cumplido con justificar que las restricciones adoptadas son proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la vida y la salud, estableciéndose un periodo determinado, mencionándose expresamente los derechos limitados, e informando por conducto del Secretario General de la OEA y la ONU —conforme a sus obligaciones internacionales establecidas en los tratados antes mencionados— las disposiciones cuya aplicación haya suspendido derechos, los motivos que suscitaron la suspensión y las fechas en las que se dará por terminada tales suspensiones. Así por ejemplo, con fecha del 30 de marzo de 2020, la Misión Permanente de Perú dio cuenta ante la OEA la nota N° 7-5-M/045 y sus respectivos anexos, comunicando por primera vez la suspensión de garantías en el contexto de pandemia, y así fue realizando las respectivas comunicaciones a medida que se fueron prorrogando las suspensiones de garantías. Mientras que la Misión Permanente de Colombia, con fecha del 19 de marzo de 2020, dio a conocer ante la OEA la nota N° 377/2020 y sus respectivos anexos, comunicando la suspensión de garantías que adoptaron, y al igual que Perú, fueron realizando las comunicaciones respectivas a medida que iban prorrogando las medidas de suspensión de derechos.

Siguiendo este hilo expositivo, destacamos las actuaciones de estos dos países latinoamericanos, que priorizaron la salud de los seres humanos y relegaron a un segundo plano la vida económica. Sin embargo, pese a lo señalado anteriormente, consideramos que ni en Perú ni en Colombia se han previsto adecuadamente

los efectos de estas medidas limitativas de derecho en las poblaciones más vulnerables, pues si bien, se adoptaron medidas para paliar el impacto de las restricciones antes referidas, estas no fueron del todo eficaces debido a que se ejecutaron de manera inadecuada, insuficiente, tardía o porque fueron directamente afectadas por los actos de corrupción institucionalizados en los gobiernos. De lo que podemos concluir es que, ambos Estados en algunos aspectos no cumplieron con su rol de garante, desprotegiendo los derechos de los sectores más vulnerados, situación que se agravó aún más con el contexto de estos dos países anterior a la pandemia.

V. DERECHOS HUMANOS AFECTADOS DIRECTAMENTE

Como lo expusimos a lo largo del presente artículo, Perú y Colombia son dos países con contextos similares, y ambos se han visto fuertemente golpeados por la pandemia causada por la COVID-19 y los efectos de las cuarentenas. Ante estos hechos, evidentemente se han ido afectando —en algunos casos de manera legítima y en otros ilegítimamente— los derechos humanos, sobre todo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Entre los derechos legítimamente afectados encontramos a los derechos relativos a la libertad personal —en su dimensión corpórea—, la libertad de reunión y la de tránsito. Pues como lo señalamos en el capítulo precedente, la suspensión de estos derechos se encuentra plenamente justificada. Por otro lado, en cuanto a los derechos humanos ilegítimamente afectados, como consecuencia de las medidas restrictivas, tenemos principalmente a los derechos a la vida digna, a la alimentación y al acceso al agua potable. A continuación, pasamos a explicarlo de manera más detallada:

1. Derecho a la vida digna.

Con respecto al derecho a la vida digna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, Corte IDH— ha ido desa-

rollando jurisprudencialmente su concepto, entendiéndola como aquel derecho que tiene una persona humana “a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna” (Corte IDH, *Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay*: párr. 144). Siguiendo esta misma línea, la Corte IDH ha señalado que:

“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria.” (Corte IDH, *Niños de la Calle vs. Guatemala*: párr. 162).

Siendo así, podemos concluir en que el derecho a la vida digna vendría a ser ese derecho de los seres humanos, a tener una existencia digna que se desarrolle en un ambiente con las condiciones materiales necesarias que la permitan. Lo que a su vez garantizaría otros derechos conexos.

En ese sentido, y al ser Perú y Colombia, países que han ratificado la CADH y reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH, la jurisprudencia de este órgano supranacional es vinculante a estos dos Estados; consecuentemente, estos países latinoamericanos —al igual que otros de la región— tienen la obligación internacional de: a) Generar las condiciones de vida mínimas, adoptando medidas positivas que coadyuven a preservar la dignidad de la persona humana y b) No producir condiciones que dificulten o impidan la materialización de una vida digna. Todo ello para lograr la finalidad última de proteger y garantizar el derecho a la vida.

Sin embargo, a raíz de las medidas de aislamiento social obligatorio decretadas para combatir la pandemia causada por la COVID-19, se ha ocasionado la paralización del sector productivo y comercial en Perú y Colombia, afectando considerablemente

las economías de las familias peruanas y colombianas, y en mayor medida a aquellas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, que viven de los ingresos que generan en el día. A su vez, esta afectación a sus economías ha desembocado, en una vulneración a su derecho a la vida digna.

En el caso del Perú —que es un país en donde el 70% de sus habitantes labora en el sector informal (Defensoría del Pueblo 2020b)— con las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria y pese a las ayudas económicas del Estado, muchas familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, han quedado privadas de las más mínimas condiciones de existencia digna, pues han dejado de generar ingresos económicos a través de los cuales —en alguna medida— trataban de hacer efectivos sus derechos a la alimentación, salud, educación, servicios básicos, entre otros; hecho que los ha vuelto más vulnerables todavía.

En el caso colombiano, el contexto es parecido, pues como ya ha quedado decantado anteriormente, Colombia está categorizado como un país pobre, en el marco de ese contexto se han suscitado dinámicas tendientes a un creciente índice de informalidad. Según datos dados por el DANE para el año 2019 en Colombia existía un índice de informalidad que oscilaba en el 47% (DANE 2019). Cifra que se traduce en que, de todos los empleos en Colombia, el 47% de ellos era informal. Ahora bien, estas condiciones relacionadas con un aspecto laboral de las personas son relevantes por cuanto el trabajo significa recibir remuneración para subsistir; sin embargo, la cuarentena decretada en Colombia obliga a quedarse en casa, limita el derecho a la libre locomoción, y así cohibe la obtención de recursos para vivir dignamente que, si son comparados con los bonos y ayudas dadas por el gobierno que anteriormente fueron reseñadas, no se alcanza a proveer la totalidad de los individuos.

Ahora bien, existen bienes y servicios que, por tratarse del contexto de pobreza en Perú y Colombia, podrán estar escasos, y en ciertas ocasiones, insatisfechos. Sin embargo, son bienes y servicios que dotan de dignidad la vida de las personas, pues de allí devienen

otros derechos vitales como la salud y la vida, con los que guardan una estrecha conexidad el derecho acceso al agua potable y a la alimentación, los mismos que desarrollamos a continuación.

2. Derecho de acceso al agua potable

El agua es un recurso básico para el desarrollo económico y social del ser humano, necesario incluso para la supervivencia de este, por esta razón su acceso se ha catalogado como un derecho humano y su reconocimiento implica necesariamente que todos los Estados deban intensificar sus esfuerzos por garantizar su ejecución, pues la satisfacción de este implica reconocer otros derechos antagónicos y conexos que dependen directamente de su materialización, así por ejemplo el agua y su acceso no sólo dotan de condiciones dignas al modo de vivir de las comunidades, sino que también posibilita un mejor estado de salud, y en consecuencia, alimenta el derecho a la vida misma, ya que el agua potable es indispensable para la subsistencia biológica del cuerpo humano. De acuerdo con la importancia de este derecho, la ONU decidió expresar su posición al mundo y consecuencialmente catalogarlo como derecho humano desde el año 2009 (ONU 2010b).

Ahora, en un contexto de pandemia, en donde dos de las principales medidas de prevención contra la COVID-19, son el frecuente lavado de manos y la limpieza, garantizar el derecho de acceso al agua se convierte en una prioridad. No obstante, pese a las medidas tomadas por los Estados de Perú y Colombia para tratar de garantizar y proteger este derecho, se ha venido vulnerando el derecho de acceso al agua potable de las poblaciones en pobreza y pobreza extrema, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.

Con respecto a ello, en el caso peruano, se emitieron los Decretos de Urgencia N° 035-2020 y N° 036-2020, con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios básicos de agua, alcantarillado, electricidad, entre otros, en el marco del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio

instaurado en Perú a consecuencia del brote del COVID-19. Reconocemos que esta, es una medida acertada por parte del Gobierno peruano; sin embargo, debemos tener en cuenta, que un sector de la población —el que se encuentra en pobreza y pobreza extrema— no tiene acceso al agua potable y la única manera en la que hacen efectivo este derecho es abasteciéndose de agua proveniente, entre otros, de parques y caños o grifos públicos, pero con el confinamiento ya no lo han podido efectivizar, y si bien se ha tratado de abastecer el servicio básico de agua a través de cisternas, esto no ha sido en forma continua. Lo que deviene en el incumplimiento de lo dispuesto en los decretos de urgencia señalados. Ante ello, es necesario que el Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, adopte nuevas políticas públicas que permitan hacer efectivo el derecho de acceso al agua potable de estas poblaciones, en forma permanente.

En Colombia, en tanto, se expidió el Decreto 441 de 2020 donde se menciona que, dentro de la declaratoria de emergencia, se deberá garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado. No obstante, al igual que en Perú, existe una contradicción entre lo que pretende el Estado para proveer el acceso a este recurso, con lo que sucede en realidad. Desde la Resolución 666/ 2020 del Ministerio de Salud, se ha manifestado la importancia de lavarse las manos, declarando incluso hacerlo, cada 2 horas. Lo anterior ubica el agua como un recurso fundamental para la desinfección de las posibles bacterias que puedan enfermar a la población, sin perjuicio de su importancia para la supervivencia humana, de ahí surge la pregunta de ¿Qué tan eficiente puede ser lavarse las manos en territorios donde no la hay agua? En el país, la accesibilidad al servicio de acueducto no llega a 3,6 millones de colombianos, según los datos del DANE su cobertura es de 92,3% (El Espectador 2018), esto quiere decir, en pocas palabras, que se torna imposible a veces seguir directrices en un contexto de carencia de recursos básicos insatisfechos.

3. *Derecho a la alimentación*

Otra situación problemática, en término de bienes y servicios esenciales que dotan de dignidad la vida humana, está encaminada a suprimir el hambre en los individuos, esta discusión ha sido enfocada a los países más pobres y ha generado unas dinámicas muy particulares de manifestación social, política y jurídica, incluso ha retornado a teorizar sobre nuevos derechos con el objeto de mitigar, amenizar y minimizar el hambre mundial, de allí nace el derecho a la alimentación.

La seguridad alimentaria ha sido un término que está contenido en el artículo 11 y el artículo 2 del PIDESC, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —Declaración UDH— y en la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El alimentarse debe ser —de acuerdo a esta normatividad vigente, una obligación que, de manera progresiva, será atendida por parte de los Estados, y su satisfacción debe ser en condiciones de dignidad.

En cuanto a este derecho, el gobierno peruano adoptó una serie de medidas —que detallamos en el acápite IV— para tratar de proteger y garantizar este derecho en el contexto de pandemia; sin embargo, estas se tornaron en ineficaces debido a diversos factores ya explicados, y como prueba de ello, tras la primera semana de cuarentena en el Perú, comenzaron a visibilizarse banderas blancas colgadas en algunas viviendas a lo largo del país, que poco a poco fueron intensificándose. Estas banderas simbolizaban un pedido de ayuda a la sociedad, por parte de aquellas personas que no habían sido beneficiadas con alguna ayuda económica del Estado y que ya no tenían posibilidades de alimentarse ni alimentar a sus familias. Ante ello diversos ciudadanos de la sociedad civil, militares y policías acudieron —con su propio peculio— a la ayuda solicitada saliendo a flote la solidaridad de los peruanos.

En el caso de Colombia, al igual que en Perú, el contexto de pandemia generó una zozobra inmensa sobre quienes no tenían cómo, desde su hogar, proveerse de alimentos en el encierro de cuarentena. En particular, llama la atención el hecho de que, como ya se ha dicho anteriormente, haya un alto grado de informalidad en el país, puesto que este es un fenómeno que afecta el desarrollo económico y social de un territorio, de allí no solo podrá predicarse la degradación a ciertos derechos laborales, también es un indicativo de que cierto sector de la población trabaja para comprarse su *diario de comida*, es decir, el no salir de casa significa no comer para este sector de individuos. Este contexto generó dinámicas sociales de resistencia, similares a lo sucedido en Perú, donde de manera recursiva la manifestación social se acopló al estado de confinamiento y muchas personas desde la distancia de sus casas y como grito de auxilio decidieron izar banderas, trapos, pedazos de ropa de color rojo en la ventana, la puerta y las fachadas de los hogares que requerían ayuda alimentaria y así exhibir que el confinamiento los protege del virus pandémico, pero pone en riesgo su seguridad alimentaria.

VI. LA SOLIDARIDAD COMO ARMA FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LAS BANDERAS DE LA POBREZA

Otro punto en común —y esta vez uno positivo— entre Perú y Colombia, es la solidaridad de su gente, como lo indicamos con anterioridad, el confinamiento tuvo un grave impacto en la población en pobreza y pobreza extrema, lo que generó inseguridad alimentaria. Por ello muchas familias peruanas y colombianas se vieron en la necesidad de colocar trapos blancos —para el caso de Perú— y rojos —para el caso de Colombia— en las fachadas de sus viviendas, para dar a conocer que requerían de alimentos. Convirtiéndose así, estas banderas en un símbolo de auxilio y en una forma de expresión comunitaria frente a la crisis alimentaria y económica que están viviendo los hogares vulnerables.

Las banderas de la pobreza y del hambre han demostrado, como acto de manifestación social, la dinamización y no estaticidad de que tienen los derechos, ya que a partir de allí se evidencia que, si bien se limitó el uso y goce del derecho a la protesta en las calles, este mutó a ser visto desde la distancia de los hogares. Entre otras cosas, la protesta social reviste una importancia muy relevante en tiempo de cuarentena, porque este derecho es un supuesto normativo de carácter instrumental, es decir, la protesta social se utiliza para proteger otros derechos con el objeto de que sean reconocidos, en este caso la seguridad alimentaria generada por las condiciones de encierro.

Las banderas blancas y rojas fueron un símbolo del hambre que consecencialmente generó solidaridad en la población, ante este llamado de solidaridad, se hicieron presente algunos miembros de la sociedad civil y de las fuerzas del orden, para suministrar alimentos a los integrantes de estos humildes hogares. Asimismo, otra práctica que se ha venido difundiendo en las sociedades peruana y colombianas, ha sido la preparación de las *ollas comunes* —para el caso de Perú— y los denominados *convites* —para el caso de Colombia— con los aportes de los vecinos de los sectores más olvidados, que coadyuvaron a dotar de alimentos a muchas familias vulnerables. Tenemos también las colectas solidarias, que han ayudado a recaudar dinero para la instalación de plantas de oxígeno a lo largo de estos países.

Sin lugar a dudas, este esfuerzo mancomunado, se ha convertido en la salvación de muchos peruanos y colombianos, pues ante la ineficacia de la gestión pública, no puede esperar que el Estado resuelva todos los problemas sociales existentes en nuestros países, por lo que la organización de la sociedad civil ha jugado un rol importante para acudir a los grupos vulnerables y así hacerles frente a los estragos causados por la pandemia.

VII. REFLEXIONES FINALES

Somos conscientes de la existencia de otras enfermedades que mayor tasa de mortalidad tienen en comparación con la COVID-19, pero solo en pocas de ellas se puede hacer visible el contexto de pobreza, las graves deficiencias de las políticas y gestión pública de los Estados y su consecuente afectación a los derechos humanos de su población.

A su vez, también consideramos que toda crisis significa una gran oportunidad de cambio que nos permite converger en torno a soluciones. Con tal seguridad podemos afirmar que, la pandemia generada por la COVID-19, traerá consigo un giro copernicano en todo el mundo, del cual no pueden estar exentos los países latinoamericanos, entre ellos Perú y Colombia. Este proceso dialógico, permitirá que en nuestras sociedades puedan replantearse nuevas formas de organización que apunten al bienestar general y el desarrollo sostenible de un fortalecido sistema democrático inclusivo.

En ese sentido, el principal desafío que tendrán que afrontar los Estados, será el de mejorar su capacidad de respuesta para afrontar este tipo de crisis, previendo en todo momento, que estas respuestas no atenten contra los derechos humanos y el Estado social y democrático de derecho. Asimismo, desde la perspectiva de los derechos humanos, es necesario destacar que estas respuestas deben otorgar mayor prioridad a las poblaciones que han sido largamente excluidas y marginadas, para ello se deben de adoptar las denominadas políticas de acción afirmativa, que permitan —a través de la inclusión— lograr la igualdad material en la sociedad.

Por otra parte, hemos evidenciado que, debido a diversos factores, las políticas adoptadas en Perú y Colombia han devenido en ineficaces; en ese sentido, es necesario que los Estados fortalezcan sus sistemas democráticos, refuercen los sistemas de salud, promuevan la formalidad en el sector laboral y planeen una lucha efectiva contra la pobreza y la corrupción, todo ello para poder enfrentar de mejor manera las futuras crisis.

Para contribuir con lo anteriormente expuesto, queremos esbozar una serie de recomendaciones, pensadas a partir de un profundo análisis del contexto comparado entre Perú y Colombia, que pueden ser viables para mitigar el impacto de estas crisis, como la actualmente vivida. Estas son:

- 1) *Establecer una renta básica universal*: la renta básica es un recurso de carácter monetario y/o en especie que podrá darse a las personas vulnerables cada periodo de tiempo determinado. Sin duda, las consecuencias de la pandemia en el mercado, las personas y su vida han hecho más difícil el subsistir diario, hecho que puede prolongarse por unos meses más o incluso años, de allí surge la posibilidad de imponerse una renta básica de carácter transitorio, como una política de acción afirmativa que pueden adoptar los gobiernos, esto mientras perduren las condiciones de necesidad y miseria que deja la pandemia en países pobres.
- 2) *Frenar la evasión de impuestos*: al ser los impuestos uno de los medios principales a través de los cuales los Estados obtienen ingresos para financiar el gasto público, resulta necesario —y más aún en el contexto de crisis por la COVID-19— que se adopten nuevas y estrictas políticas fiscales que coadyuven a mejorar la administración fiscal, frenar la mala praxis de evadir impuestos e incrementar los ingresos públicos en Perú y Colombia, y en general en toda Latinoamérica; especialmente de los contribuyentes más acaudalados, pues para nadie es ajeno que, los que más ganan lo hacen a costa del Estado.
- 3) *Crear un Impuesto Solidario*: para efectos del presente, es necesario entenderse por impuesto el tributo que una persona, empresa o familia debe aportar con el fin de suplir las necesidades e intereses colectivos de una población. Bajo esta óptica consideramos viable que sea una política de Estado, tanto en Perú como en Colombia, la imposición de un impuesto que deba ser pagado por un sector de la población —aventajados—, para apoyar las necesidades de quienes son desaventajados, su justi-

ficación se sustenta en el hecho de que Perú y Colombia —tal y como fue decantado en apartes anteriores— sean países que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad por su contexto de pobreza y pobreza extrema, situación que se acrecentó con la llegada de la pandemia.

- 4) *Fortalecer la Cooperación Internacional entre los países latinoamericanos*: a lo largo del artículo pudimos exponer que Latinoamérica y su contexto actual demuestra un atraso estructural en comparación con los demás Estados del mundo, este asunto ha producido que la llegada de la pandemia haya desmejorado las condiciones de vida de las personas, en ilustración a ello, es indispensable mencionar que el apoyo globalizado entre naciones ha sido el soporte del desarrollo histórico en distintos países; por lo tanto, la unión entre países latinoamericanos debe ser un motivo para afrontar la crisis que se acrecentó con la llegada de la COVID-19 y posteriores que puedan aparecer.

Al respecto, se puede traer a colación las experiencias de Europa con la existencia de la Unión Europea, entidad que cumple función de acoger la integración y gobernanza entre territorios europeos. De esta manera, se propone la creación de un organismo para producir enlaces, vínculos y alianzas entre países latinoamericanos con el objeto de mitigar las crisis históricas, estructurales y venideras de los países que la conforman y así producir un camino al desarrollo económico, social y personal del territorio.

- 5) *Adoptar medidas que apunten a solucionar futuras crisis*: podemos afirmar que la pandemia, nos ha dejado una valiosa lección relacionada a la importancia de la prevención, y siendo previsible futuras crisis, es necesario que nuestros países adopten —desde ahora— medidas preventivas que contribuyan con la protección de su población, sobre todo de aquellos grupos que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Bustamante Alarcón, Reynaldo (2018): *La idea de persona y dignidad humana*, Dykinson, Madrid, España.
- Casal Hernández, Jesús María (2008): *Los derechos humanos y su protección: estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales*, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
- CICR (2018): “Cinco conflictos armados en Colombia ¿Qué está pasando?” en CICR, Suiza. Disponible en: «<https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando>» [Consultado el día 17 de julio de 2020].
- Comisión IDH (2020): “Comunicado de Prensa No. 76/20. La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales” en OEA, Washington. Disponible en: «<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp>» [Consultado el día 15 de julio de 2020].
- Comisión IDH (2017): “Informe temático. Pobreza y Derechos Humanos” en *Comisión IDH*, Washington. Disponible en: «<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDD-HH2017.pdf>» [Consultado el día 16 de septiembre de 2020].
- DANE (2020): “Comunicado de prensa. Pobreza multidimensional en Colombia” en DANE, Bogotá. Disponible en: «https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/cp_pobreza_multidimensional_19.pdf» [Consultado el día 30 de julio de 2020].
- DANE (2019): “Boletín técnico octubre-diciembre, 2019” en DANE, Bogotá. Disponible en: «https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_oct19_dic19.pdf» [Consultado el día 12 de septiembre 2020].

Defensoría del Pueblo (2020a): “Entrega de bonos a hogares en el contexto de la emergencia por la COVID-19: Dificultades y recomendaciones. Serie de Informes Especiales N° 025-2020-DP” en *Defensoría del Pueblo del Perú*, Lima. Disponible en: «<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-25-2020-DP-Entrega-de-bonos-a-hogares-en-el-contexto-de-la-emergencia-por-la-COVID-19.pdf>» [Consultado el día 13 de septiembre de 2020].

Defensoría del Pueblo (2020b): “Estado de Emergencia Sanitaria: El problema de la informalidad laboral en una economía confinada. Serie de Informes Especiales N° 02-2020-DP” en *Defensoría del Pueblo del Perú*, Lima. Disponible en: «<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf>» [Consultado el día 10 de septiembre de 2020].

DINERO (2020): “La corrupción tras los recursos para la pandemia” en *DINERO*, Colombia. Disponible en: «<https://www.dinero.com/edicion-impresa/editorial/articulo/la-corrupcion-tras-los-recursos-para-atender-la-pandemia/290434>» [Consultado el día 17 de septiembre del 2020].

El Espectador (2018): “Lo que falta en suministro de agua y alcantarillado en Colombia” en *El Espectador*, Colombia. Disponible en: «<https://www.elespectador.com/noticias/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarillado-en-colombia/>» [Consultado el día 17 de septiembre del 2020].

Forbes (2020): “Fiscalía ordena captura de diez alcaldes por contratos del COVID-19” en *Forbes Colombia*, Colombia. Disponible en: «<https://forbes.co/2020/05/21/actualidad/fiscalia-ordena-captura-de-diez-alcaldes-por-contratos-del-covid-19/>» [Consultado el día 17 de septiembre del 2020].

INEI (2020): “Condiciones de vida de la población en riesgo ante la pandemia del COVID-19” en *Portal FinDev*, Lima. Disponible en: «https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1745/libro.pdf» [Consultado el día 27 de julio de 2020].

La Contraloría General de la República del Perú (2020a): “Boletín 16 Contraloría en acción”, en *La Contraloría General de la República del Perú*, Lima. Disponible en: «http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/45ed94ca-eb9e-47d7-a25e-384b321d1557/BOLETIN_MARZO_ABRIL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=45ed94ca-eb9e-47d7-a25e-384b321d1557» [Consultado el día 10 de agosto de 2020].

La Contraloría General de la República del Perú (2020b): “Boletín 17 Contraloría en acción” en *La Contraloría General de la República del Perú*, Lima. Disponible en: «<http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/464aa198-f73e-4465-8033-3ca120a5b6ed/Boletin-mayo-junio2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=464aa198-f73e-4465-8033-3ca120a5b6ed>» [Consultado el día 10 de agosto de 2020].

ONU (2019): “Informe Panorama Social de América Latina”, en *Comisión Económica para América y el Caribe*, Santiago de Chile. Disponible en: «https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf» [Consultado el día 20 de julio de 2020].

ONU (2015): “Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio” en *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*, Washington. Disponible en: «https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDG_Report_2015.pdf» [Consultado el día 15 de agosto de 2020].

ONU (2010a): “El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad” en *Comisión Económica para América y el*

Caribe, Santiago de Chile. Disponible en: «https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2977/1/S2010622_es.pdf» [Consultado el día 1 de agosto de 2020].

ONU (2010b): “El derecho humano al agua y el saneamiento. Resolución N. 64/292” en ONU, Disponible en: «https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S» [Consultado el día 13 de agosto de 2020].

ONU-FAO (2012): “Informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” en *Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*, Santiago de Chile. Disponible en: «<http://www.fao.org/3/CA2127ES/ca2127es.pdf>» [Consultado el día 13 de septiembre de 2020].

OPS (2020): “Comentarios de la directora de la OPS sobre la pandemia de COVID-19” en *Organización Panamericana de Salud*, Washington. Disponible en: «<https://www.paho.org/es/documentos/comentarios-directora-ops-sobre-pandemia-covid-19-11-marzo-2020>» [Consultado el día 13 de agosto de 2020].

Peces-Barba, Gregorio (2007): *Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos*, Espasa Calpe, Madrid.

Spicker, Paul *et al.* (2009): *Pobreza. Un glosario internacional*, CLACSO, Buenos Aires.

Transparencia Internacional (2020): “Índice de Percepción de la Corrupción 2019” en *Proética*, Berlín. Disponible en: «https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/CPI2019_Report_ES-WEB.pdf» [Consultado el día 26 de agosto de 2020].

Unidad de Víctimas (2020): “Red Nacional de Información” en *Unidad de Víctimas*, Bogotá, Colombia. Disponible en: «<https://cifras.unidadvictimas.gov.co/>» [Consultado el día 17 de septiembre del 2020].